

El gobierno de las deudas

María Paz Arzola
 Libertad y Desarrollo



Hasta un 42,3% del PIB se ha disparado la deuda pública y a 2,9% subió el déficit fiscal, cifras que indican la falta de espacio para aumentar el gasto público durante este y los años que vienen. Pese a ello, el gobierno persiste en avanzar con sus costosas iniciativas, aunque sean otros los que deban pagarlas e incluso si debe pedir prestado a sus eventuales beneficiarios. A este paso, todo indica que este será el gobierno de las deudas.

En materia de pensiones, con el objeto de favorecer a quienes tienen bajos ahorros, el gobierno ideó la fórmula de pedir dinero a quienes trabajen y no se oculten tras la informalidad (que según el INE alcanza el 26,4%). El Estado contraerá así una deuda que deberá devolver una vez que estos jubilen y que no queda más que esperar que no acabe siendo, nuevamente, una obligación que se termine subestimando.

Así también, si de deudas se trata, hay dos en el ámbito educacional que fueron emblemas de campaña. La primera, la del CAE, que asciende a más de US\$ 10.000 millones y que si en un comienzo se prometió condonar, tras hacer los cálculos, en su lugar el gobierno ha ofrecido rebajar parcialmente. A cambio, los deudores deberán someterse al pago de un impuesto que permita no solo devolver lo invertido en sus propios estudios, sino también financiar la gratuidad de quienes no trabajen, lo hagan de manera informal o bien obtengan ingresos bajos. Si esta iniciativa prospera, y con la de pensiones ya en marcha, los trabajadores formales podrían tener que destinar hasta el 36% de sus ingresos al pago de cotizaciones para salud, pensiones, seguro de cesantía y financiamiento de la educación superior (FES), a lo que habría que sumar además el impuesto a la renta.

Quienes, en paralelo, serán favorecidos con un beneficio que otros deberán soportar son los docentes, que han venido demandando sistemáticamente el pago de la denominada deuda histórica, que el gobierno prometió saldar. El Colegio de Profesores llegó a un acuerdo con el ministro de Educación para poner término a esa pretensión y renunciar a cualquier acción o reclamo futuro al respecto, a cambio de un bono que costará al próximo gobierno US\$ 270 millones. Solo el tiempo dirá si este será el fin de una era o solo una tregua.

Finalmente, hay una deuda que debiera quitarle el sueño al gobierno y que, paradójicamente, es la única que pareciera no hacerlo. Esta es la que sus dirigentes contrajeron con los niños del país, primero, por las malas reformas que impulsaron años atrás, tanto desde la calle como desde el Congreso, y luego por oponerse a las clases presenciales durante la pandemia. Esta deuda, que sigue creciendo como una bola de nieve ante un plan de reactivación completamente insuficiente, requiere de acciones y recursos hoy mismo, pues cuando sus consecuencias se vuelvan patentes ya será demasiado tarde y, a diferencia de las anteriores, no podrá condonarse ni saldarse con préstamos a terceros.